***Decreto legislativo de 8 de enero de 1830,
aboliendo en el Estado los establecimientos monásticos.***

La Asamblea Legislativa de Nicaragua.

Considerando: que los institutos monásticos son opuestos y no conformes con las bases del sistema que ha adoptado la nación: que no es sólo extraño sino contrario a los intereses de ésta el que habitantes hijos de ella, estén bajo las órdenes de mandatarios de otra nación, después de haberse declarado soberana e independiente: que según las constituciones de las órdenes que rigen dichos institutos deben sus miembros obedecer a los generales y generalísimos de ella residentes en Europa: que en fin las profesiones que han vinculado a los regulares existentes en el Estado son nulas, según lo dispuesto por el Concilio Tridentino en la sesión 25 al capítulo de reformation, por haberse verificado bajo los votos de religiosos inhábiles y ante prelados también inhábiles, a causa de que no han observado vida común y han sido por consiguiente propietarios: ha venido en decretar y

Decreta:

Art. 1º. Quedan para siempre abolidos en el Estado los establecimientos monásticos, nombrados de San Francisco, Merced y Recolectión. (*)

(*) Por el art. 20 del concordato celebrado entre Nicaragua y la santa sede, en 2 de noviembre de 1861, pueden los obispos establecer órdenes y congregaciones religiosas de regulares de ambos sexos, poniéndose de acuerdo con el Gobierno.

Art. 2º. Los individuos que a ellas pertenecen deberán precisamente solicitar ante el Gobierno su secularización dentro del perentorio término de treinta días, contados desde el de la publicación de este decreto, y será un deber de éste, concederla sin que baste causa ni pretexto alguno para negarla.

Art. 3º. El que dentro del término prefijado en el artículo anterior no quisiere secularizarse, evacuará precisamente el territorio del Estado y no podrá pasar a otros de la Unión sin previo permiso de su Gobierno.

Art. 4º. En el Estado no se admitirá ningún regular que quiera habitarle; sino es que antes solicite su secularización.

Art. 5º. Los secularizados que no tengan un impedimento legal, quedan en el libre uso de los derechos de ciudadano de que gozan los demás habitantes del Estado.